

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ
DEMANDADO	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y COLPENSIONES.
RADICADO	05001-31-05-004-2018-00141-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Calculo actuarial a cargo de empleador privado, y pensión de vejez con Ley 71 de 1988.
DECISIÓN	Modifica, adiciona y confirma.

Medellín, quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ** contra la sociedad **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 045**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, resolver los recursos de apelación formulados por los apoderados judiciales de la parte demandante, y las codemandadas SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., y COLPENSIONES, e igualmente se conocerá del proceso bajo el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, en aquellos aspectos desfavorables que no hayan sido objeto de alzada, contra la sentencia que profirió el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 30 de marzo de 2023, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS.

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el señor JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ nació el 10 de enero de 1933, y en razón de su edad se hizo beneficiario del régimen de transición pensional, y durante su vida laboral presto sus servicios a diferentes empleadores públicos y privados, con los cuales logro reunir un total de 1.164 semanas, superando los 20 años de servicio.

Laboró al servicio del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA desde el 28 de marzo de 1979 al 15 de junio de junio de 1988, y para la sociedad SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. desde el 16 de julio de 1959 al 4 de junio de 1969, sin embargo, estos empleadores no realizaron afiliación y/o aportes al sistema general de pensiones, tiempos que deben ser tenidos en cuenta por COLPENSIONES, a través de las figuras del bono pensional (empleador público) y cálculo actuarial o título pensional (empleador privado), para con ellos proceder al reconocimiento de una pensión de vejez en virtud del régimen de transición pensional, pues el actor arribó a la edad pensional de 60 años (hombres) en el año 1993, y en virtud del principio de favorabilidad tiene derecho a una pensión de vejez bajo la normativa anterior que le resulte más favorable, esto es, acuerdo 049 de 1990, Ley 71 de 1988, o Ley 33 de 1985.

III. – PRETENSIONES

Solicita el accionante se condene a las codemandadas DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., a reconocer y pagar a favor del señor JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ el bono pensional y el cálculo actuarial correspondiente, por los tiempos públicos y privados laborados sin cotización a pensiones, en consecuencia se CONDENE a COLPENSIONES a incluir esos tiempos en la historia laboral del demandante, y con base en ellos proceder con el reconocimiento de una pensión de vejez a favor del actor, junto con los intereses moratorios, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

Y como pretensión subsidiaria a la pensión de vejez deprecada, solicita se tenga en cuenta el tiempo público y privado no cotizado, en el reajuste de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que le fue reconocida al actor por parte de COLPENSIONES, junto con los intereses moratorios, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

COLPENSIONES dio respuesta oportuna a la demanda a través de su apoderada judicial, según consta a folios 91 al 97 del archivo PDF 001, admitiendo como ciertos los hechos relativos a la edad del demandante, y el agotamiento de la reclamación administrativa, no constándole la existencia y pormenores de relación laboral con el codemandado SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., o el tiempo público que refiere haber laborado al servicio del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA PENSIÓN DE VEJEZ A FAVOR DEL DEMANDANTE; INEXISTENCIA DE INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL DEMANDANTE; AUSENCIA DE CAUSA PARA PEDIR; PRESCRIPCIÓN; BUENA FE; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS; Y COMPENSACIÓN”*.

A su turno, la apoderada judicial del **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, también recorrió en forma oportuna el traslado otorgado, según consta a folios 105 al 126 del archivo PDF 001, admitiendo como ciertos los hechos relativos a la edad del demandante, su afiliación al ISS, y el tiempo público laborado al servicio de la entidad, advirtiéndole que fue en vigencia de la Ley 100 de 1993, que surgió la obligación en el sector oficial de afiliación y pago de aportes a una administradora o fondo de pensiones, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, siendo algunos de ellos, simples apreciaciones jurídicas que realiza la parte activa; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; FALTA DE CAUSA PARA PEDIR; COMPENSACIÓN RESPECTO A LO PAGADO A COLPENSIONES, y la GENÉRICA”*

Finalmente, el apoderado judicial de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** contestó oportunamente la acción, según se aprecia a folios 169 al 185 del archivo PDF 001, manifestando frente a los hechos expuestos, que son ciertos aquellos que aluden a la fecha de nacimiento del actor, la existencia de la relación laboral y los extremos de la misma, pero aclara que la no cotización al ISS, se debió a al momento de iniciarse la relación laboral aún no había comenzado a funcionar el Instituto de Seguros Sociales, y por ello el actor solo fue afiliado a partir del 1° de enero de 1967, momento en que el empleador se subroga en los riesgos pensionales, resaltando que el deber de aprovisionamiento en cabeza de los empleadores solo comenzó con la Ley 100 de 1993, sin que le consten los restantes supuestos fácticos narrados por activa, los cuales deberán ser objeto del debate probatorio en la litis. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, IMPOSIBILIDAD DE RETROACTIVO NORMATIVO EN OBLIGACIONES LABORALES EXTINTAS; PRESCRIPCIÓN; COBRO DE LO NO DEBIDO; y BUENA FE”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación y consulta, el juez a quo en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 30 de marzo de 2023, DECLARÓ que la sociedad SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., está obligada a pagar a COLPENSIONES el valor del título pensional mediante la figura del cálculo actuarial a satisfacción de COLPENSIONES, por el periodo comprendido entre el 16 de julio de 1959 y el 4 de junio de 1969, teniendo en cuenta para ello los salarios reportados por el empleador, y este último deberá solicitar la elaboración del cálculo actuarial correspondiente dentro de los 15 siguientes a la ejecutoria de la sentencia, pagarlo dentro de los plazos establecidos por la administradora pública de pensiones.

De otro lado, CONDENÓ a COLPENSIONES a incluir en la historia laboral del demandante el cálculo actuarial a cargo de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., y a gestionar la expedición de un bono pensional tipo B ante el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, por el tiempo público laborado por el demandante, y con base en estos tiempos públicos y privados, proceder con el reconocimiento de una pensión de vejez a favor del demandante en aplicación directa de la Ley 71 de 1988, a partir del 21 de febrero de 2015, en razón de 13 mesadas anuales, disponiendo la indexación del eventual retroactivo pensional adeudado, y declarando parcialmente probada la excepción de prescripción en relación a la mesadas causadas y no cobradas oportunamente con anterioridad a esta fecha, autorizando a COLPENSIONES a descontar del retroactivo adeudado, el porcentaje destinado al subsistema de salud.

Declaró probada la excepción de compensación, autorizando a COLPENSIONES a descontarse en forma indexada lo ya pagado al actor a título de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

Finalmente impuso las costas del proceso en la primera instancia a cargo de las codemandadas SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., y COLPENSIONES, y en favor del demandante, absteniéndose de formular condena a favor o en contra del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Como fundamento de su decisión estimó el juez de primer grado que si bien para la fecha en que el actor prestó sus servicios a la sociedad SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., no existía cobertura del ISS hoy COLPENSIONES, y por ende no había lugar a efectuar cotizaciones, no puede perderse de vista que el empleador tenía a su cargo la obligación pensional respecto aquellos trabajadores frente a los cuales no había operado la subrogación pensional, no obstante, como el actor ya se encuentra afiliado a una administradora de pensiones, esa obligación patronal debe verse materializada en el pago de un cálculo actuarial, conforme lo señalado en el art. 33 de la Ley 100 de 1993, y lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Y en relación al tiempo público laborado al servicio del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA el cual debe estar representado en un bono pensional tipo B, coligió que no era al actor al que le correspondía solicitar el pago del bono, pues es un trámite reglado, que debe adelantar COLPENSIONES, al cual no podrá oponerse el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y al ser ello así, este empleador público no resulto vencido en juicio, y no habrá lugar a condena en costas.

En relación a la pensión de vejez, concluyo que el demandante no es beneficiario del régimen de transición pensional, pues cumplió requisitos en el año 1993, es decir, antes de comenzar la vigencia de la ley 100 de 1993, y el sistema general de pensiones allí previsto, y por ello su derecho pensional debe operar como una aplicación directa de la normatividad anterior, que en su caso sería la ley 71 de 1988 que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, pues la ley 33 de 1985 solo alude a tiempos públicos, y el decreto 758 de 1990, no amparo al demandante, pues este su última periodo fue al servicio del departamento de Antioquia en el año 1988.

El actor entre tiempo públicos y privados registra un total de 1.165.85 semanas, equivalentes a más de 20 años de servicios, y cumplió los 60 años en el año 1993, no obstante, como la pensión solo se solicitó en el año 2013 (fl. 61), fecha en que operó la interrupción de la prescripción, el actor contaba hasta el año 2016 para demandar, y al no hacerlo, nuevamente comenzó a

correr el termino prescriptivo, y por ello el disfrute pensional solo procederá 3 años hacia a tras de la fecha de presentación de la demanda (21-02-2018).

Accedió al reconocimiento pensional a partir del 21 de febrero de 2015, en razón de 13 mesadas anuales, indicando que la mesada 14 solo comenzó con la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Negó la pretensión a intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, pues el reconocimiento pensional es fruto de una hermenéutica jurisprudencial que no le era dable aplicar a COLPENSIONES, quien simplemente estaba sujeta a lo que se resolviera en esta sentencia, en su lugar, accedió a la indexación de las condenas.

VI. – RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

PARTE DEMANDANTE: su apoderada judicial dice no estar de acuerdo con la manera en que debe realizarse el trámite para el pago del bono pensional tipo B, pues no se puede dejar al arbitrio de COLPENSIONES la realización de dicho trámite, pues con ello se pone en riesgo el derecho pensional del demandante, quien cuenta con una avanzada edad, y por ello, lo más adecuado sería ordenar al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a realizar el pago del Bono Pensional correspondiente, pues el demandante no puede ser sometido a un trámite administrativo entre entidades.

También dice apelar, la normativa pensional con la cual debe reconocerse y liquidarse la pensión de vejez del demandante, pues en virtud del principio de favorabilidad, la norma anterior más favorable para el actor es el acuerdo 049 de 1990, y no la Ley 71 de 1988, como lo determinó el *A Quo*, desconociendo la jurisprudencia del órgano de cierre, pues el actor reúne los requisitos del art. 12 del acuerdo 049 de 1990 para causar una pensión de vejez.

Ataca lo resuelto frente a la excepción de prescripción, pues en realidad el actor reclamó su derecho pensional el día **10 de abril de 2017**, siendo este el

punto de partida para contabilizar el término trienal de prescripción, y no la fecha de presentación de la demanda, como equivocadamente lo asumió el juez de primer grado.

Insiste en la pretensión a los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, pues COLPENSIONES no demostró haber realizado una gestión en el recaudo de los aportes pensionales, que le hacían falta al actor para reunir la densidad mínima de cotizaciones o tiempo de servicios.

Y finalmente solicita la condena a la mesada 14, pues la pensión de vejez del actor se causó en el año 1993, y su mesada no excedería el valor de los 15 SMLMV, también solicita se extienda la condena en costas procesales al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA pues esta entidad ha sido renuente en responder por el tiempo público laborado y no cotizado, hasta el punto de oponerse a las pretensiones formuladas y proponer excepciones para enervarlas.

A su turno la apoderada judicial de COLPENSIONES, se opone al reconocimiento pensional a favor del demandante, pues según refiere este no reúne los requisitos para causar una pensión de vejez en los términos de la Ley 71 de 1988, y debe ser el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA la entidad que asuma el reconocimiento de dicha prestación, pues fue esta la última entidad en la que se realizaron aportes.

También expone que al actor le fue reconocida por parte de COLPENSIONES una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la cual resulta incompatible con la pensión de vejez que hoy depreca, y tampoco resulta procedente cargar en la historia laboral del demandante, semanas cotizadas con anterioridad al 1° de enero de 1967, motivos por los cuales solicita la revocatoria de la sentencia impugnada.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.: inconforme con decisión de primer grado, la apoderada judicial de esta sociedad la ataca en alzada, solicitando su revocatoria, precisa que los extremos del cálculo actuarial contienen un error, pues a partir del 1° de enero de 1967 la sociedad si

realizó cotizaciones a favor del demandante, y no es dable ordenar un cálculo actuarial sobre un mismo periodo ya cotizado.

Refiere igualmente que al haberse ordenado una pensión de vejez a favor del demandante en aplicación de la Ley 71 de 1988, relativa al sector público, no habría lugar al cálculo actuarial ordenado, pues con anterioridad al 1° de enero de 1967, los empleadores no estaban obligados a realizar aportes pensionales, solo estarían eventualmente llamados a responder por una indemnización sustitutiva privada, que resulta compatible con la indemnización sustitutiva que ya le fue reconocida por COLPENSIONES.

Finalmente expone que en el hipotético caso de confirmarse la sentencia de primera instancia, se modifique la misma en el sentido de no ordenar el pago de un cálculo actuarial, sino de una reserva actuarial, la cual no conlleva el pago de intereses moratorios, pues la sociedad no ha sido morosa en sus obligaciones con el empleado.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de COLPENSIONES, insiste en que el actor no acredita el tiempo requerido en la ley 71 de 1988 para la prestación de vejez, pues en su historia laboral solo registra 289 semanas, las cuales son equivalentes a 5 años, 7 meses y 3 días de cotización al ISS, y fue por ello que la entidad accedió a la Indemnización Sustitutiva de Vejez a través de la Resolución GNR 448444 del 29 de diciembre de 2014 en cuantía de \$10.632.023, con base en 289 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

Expone que esta indemnización sustitutiva de vejez, es incompatible con las pensiones de vejez, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1730 de 2001, por lo que las semanas ya reconocidas en la indemnización sustitutiva de vejez no pueden volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto.

También resalta la improcedencia del estudio de liquidación del cálculo actuarial de los periodos anteriores al 01 de enero de 1967, por la imposibilidad que resulta de cargar a la historia laboral periodos anteriores a la entrada en vigencia del Instituto de Seguros Sociales- ISS.

A su turno, el apoderado judicial de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., solicitando en sus alegaciones finales la revocatoria de la sentencia de primer grado.

En cuanto a los extremos para liquidar el cálculo, acusa la sentencia impugnada de haberse omitido la afiliación al sistema en enero 1 de 1967, fecha en la cual se tuvo cobertura por parte del Seguro Social, entonces resulta antijurídica la fecha establecida por el Despacho extendiendo la 2 condena hasta junio 4 de 1969, pues para tal fecha ya se encontraba el actor vinculado al Seguro Social no siendo procedente un pago sobre dichos periodos.

Considero errada la forma en que el Despacho ordenó la liquidación del título actuarial puesto que, se indica en la sentencia que debe realizarse dicho cálculo bajo los parámetros de la Ley 71 de 1988, tal situación es improcedente en el caso que nos ocupa pues la obligación que se le podría llegar a imponer a mí representada sería el reconocimiento de prestación indemnización sustitutiva en los mismos términos en los cuales la entidad Colpensiones efectuó tal reconocimiento al demandante, aplicando la reserva actuarial para el periodo comprendido entre julio de 1959 y diciembre 31 de 1967 y no el cálculo con intereses moratorios como si la sociedad hubiera incurrido en omisión de su deber de afiliación y pago de aportes.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver, previas las siguientes,

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Calculo actuarial a cargo del empleador privado, y bono pensional a cargo de la entidad oficial, pensión de vejez con sumatoria de tiempos, aplicación directa de la Ley 71 de 1988: Los

presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Planteados los recursos de apelación tal y como se encuentran, así como el grado jurisdiccional de consulta que se surte a favor de COLPENSIONES, los problemas jurídicos estriban en dilucidar. *i)* si al empleador privado SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., le asiste obligación de responder por el tiempo laborado y no cotizado caja o fondo de pensiones, con anterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones, con respecto al trabajador JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ, y en caso afirmativo, *ii)* determinar la manera en que debe operar el pago de dicha obligación, y *iii)* si con estos periodos y aquellos otros representados en un Bono Pensional tipo B a cargo del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, el demandante logra acreditar el requisito de semanas cotizadas para acceder a una pensión de vejez bajo la Ley 71 de 1988 o el acuerdo 049 de 1990, vigentes para el año 1993, la fecha del disfrute pensional, en atención a la excepción de prescripción propuesta, así como la procedencia o no de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto de la indexación de las condenas.

Relación laboral y cálculo actuarial

Debe advertirse, que en el sub lite no es materia de controversia la existencia de una relación laboral, como tampoco sus extremos temporales, y la no cotización a una caja o fondo de previsión social a favor del trabajador por el periodo comprendido entre el 16 de julio de 1959 y el 31 de diciembre de 1966, pues tales supuestos fácticos fueron aceptados por la empresa demandada.

Ahora bien, en cuanto al juicio jurídico realizado por la codemandada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., a efectos de sostener que la obligación de aprovisionar hacia futuro el valor de los cálculos actuariales en la suma correspondiente al tiempo servido por el trabajador, con respecto a aquellos empleadores que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, solo surgió con la vigencia de la Ley 100 de 1993, misma

que no puede ser aplicada retroactivamente, estima la Sala que este argumento de la irretroactividad de la ley planteado en la alzada, no puede tener acogida en esta instancia, por cuanto el mismo no tiene ningún fundamento jurídico o jurisprudencial, y menos, de orden constitucional, que haga soportar al demandante el hecho de tener que verse abocado a que ese periodo de tiempo laborado y aceptado por la empresa demandada, se vea perdido y sin ninguna trascendencia en el ámbito de la seguridad social. Es decir, que, concebida la sentencia en el proceso ordinario como una solución jurídica a una controversia, la que aquí se revisa en apelación no cumple con ese cometido.

Será preciso entonces, tratar el tema de la responsabilidad que le asiste al empleador respecto a las obligaciones que reclama el demandante por un tiempo durante el cual laboró a su servicio, antes de cobrar vigencia la Ley 100 de 1993.

Bajo esta óptica, en el caso materia de análisis, toda la responsabilidad por ausencia de afiliación (más allá de que la misma para las calendas pertinentes al caso haya sido optativa y no obligatoria, además de las consideraciones propias de la falta de cobertura del entonces Instituto de Seguros Sociales, pues con anterioridad al 1º de enero de 1967 el Instituto solo había comenzado a funcionar para los riesgos de enfermedad, maternidad y de accidentes profesionales.

No puede perderse de vista que, si bien, conforme no se había creado la ley unificadora de la seguridad social para los periodos comprendidos entre el 16 de julio de 1959 y el 31 de diciembre de 1966; era el propio empleador el que asumía el pago de las pensiones de jubilación de sus trabajadores, y por ende estaba obligado a realizar los aprovisionamientos necesarios para cumplir con esa eventual pensión, pues así lo ordenaba la **Ley 90 de 1946**, y así lo tiene decantado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia como puede verse en la sentencia CSJ SL 9856-2014, reiterada en las providencias CSJ SL 1300-2014, CSJ SL 10122-2017, CSJ SL068-2018 y CSJ SL-3547-2018, SL-976-2022, y SL-3760-2022, donde se definieron los siguientes aspectos: **(i)** que no se podía negar que los empleadores mantenían obligaciones y responsabilidades respecto de sus trabajadores, a pesar de que no actuaran de manera incuriosa, al dejar de inscribirlos a la seguridad social en

pensiones; **(ii)** que, en ese sentido, esos lapsos de no afiliación por falta de cobertura, debían estar a cargo del empleador, por mantener en cabeza suya el riesgo pensional, y **(iii) que la manera de concretar esa responsabilidad es mediante el traslado del CÁLCULO ACTUARIAL para de esa forma garantizarle que la prestación estará a cargo del ente de seguridad social.**

Destacando la Corte, que la omisión en la afiliación por cualquier causa se resuelve con normas vigentes al momento en que se causa el derecho pensional reclamado y no las que regulaban la falta de afiliación para el momento en que el empleador incurrió en dicha omisión. Así lo precisó la Sala en sentencia CSJ SL14215-2017:

(...) Al respecto, es suficiente recordar que a la luz de la jurisprudencia actual de esta Sala, «las normas que pueden contribuir a resolver [las] hipótesis de omisión en el cumplimiento de la afiliación al Instituto de Seguros Sociales o en el pago de aportes, con arreglo a los principios de la seguridad social de universalidad e integralidad, deben ser las vigentes en el momento del cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, pues ciertamente ha existido una evolución legislativa tendiente a reconocer esas contrariedades, de manera tal que las pueda asumir el sistema de seguridad social, pero sin que afecte su sostenibilidad financiera» (...).

Razonamientos que también fueron acogidos por la Corte Constitucional en el Auto 068 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, y el cual se ha aplicado en varias sentencias de tutela, expuso:

*“En la sentencia T-784 de 2010 la Corte Constitucional concedió el amparo del derecho a la seguridad social, pues la reconstrucción que hizo del régimen pensional aplicable a quienes trabajaban para las empresas dedicadas a la actividad petrolera, **le permitió acertadamente advertir que estas últimas sí estaban obligadas desde la Ley 90 de 1946 a efectuar los aprovisionamientos correspondientes para efectuar las cotizaciones al seguro social cuando así se les exigiera de acuerdo con la ley.** No obstante, está claro en el proceso que durante todo el tiempo que el señor Julio César Ariza Pinilla trabajó para las entidades demandadas, estas últimas se beneficiaron de la fuerza de trabajo del tutelante, quien prestó sus servicios personales bajo subordinación jerárquica, pero no hicieron los aprovisionamientos pensionales que le depararan a este último al llegar a su vejez, una vida verdaderamente digna y humana. La Corte Constitucional debe, entonces, corregir ese problema...”*

Criterios jurisprudenciales que comparte y acoge esta colegiatura, toda vez que en un estado social de derecho no se puede tolerar el que una persona que entregó su fuerza de trabajo por varios años, se vea perjudicada con la negación de un derecho constitucionalmente consagrado, irrenunciable y directamente relacionado con el mínimo vital como principio y derecho iusfundamental, debiéndose por consecuencia, que ese tiempo se vea reflejado en sus cotizaciones a pensiones, y pueda materializar el disfrute de las prestaciones que protegen los riesgos por invalidez, vejez y muerte, y por ello en principio no era indispensable que el demandante acreditare los requisitos pensionales para que le sea reconocido el cálculo actuarial, pues estas cotizaciones le pertenecen independientemente de que satisfaga o no los requisitos para una pensión de vejez.

Incluso, la Corte Constitucional en su jurisprudencia, ha destacado que, en situaciones más extremas en las que la pensión se encuentre exclusivamente a cargo del empleador, sin afiliación, puede llegar a liberarse al asegurado de tener que asumir que ese tiempo no se tiene en cuenta, a efectos de acumular tiempo cotizado y no cotizado. Así, es del caso traer a colación la sentencia de la Corte Constitucional con radicado T-410 del 26 de Junio de 2014, M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, según la cual se debe inaplicar el requisito relativo a la demostración de un contrato de trabajo, como lo refiere el literal c) del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 9º de la Ley 797 del 2003, para efectos de acumulación del tiempo de servicio, toda vez que este requisito viola los derechos adquiridos del trabajador, la efectividad de las cotizaciones, los periodos trabajados y la seguridad social en los ingresos pensionales.

Así lo sostuvo la Sala Novena de revisión de la Corte Constitucional, en la providencia citada, al advertir que los jueces, en cada caso, deben aplicar la excepción de inconstitucionalidad de ese requisito y ordenarle al empleador trasladar al régimen de pensiones del trabajador el valor del cálculo actuarial correspondiente al tiempo de servicios prestados. Con esta postura, el alto tribunal abandonó la tesis sostenida en la Sentencia T-814 del 2011, donde se había expuesto que era imposible inaplicar el requisito fijado en la norma y acumular, para efectos pensionales, los periodos laborados con anterioridad a la vigencia de la ley 100 ante empleadores que no tenían la obligación de afiliar

a sus trabajadores al ISS y cuyos contratos de trabajo ya habían expirado a la entrada en vigor del sistema general de pensiones.

La providencia de la Corte a la que se hace alusión, solo tiene como finalidad ilustrar cual es la tendencia actual de esta Alta Corporación frente a la problemática suscitada en el recaudo de cotizaciones, donde se colige que todo está orientado a convalidar el tiempo laborado, sin la exigencia de ciertos requisitos formales, que pueden volver nugatorio el derecho pensional como tal, motivos por los cuales habrá de confirmarse lo resuelto en primera instancia, al encontrarse ajustado a derecho y a la jurisprudencia nacional.

Finalmente, y frente a la manera en que se debe cumplir la obligación impuesta por el periodo laborado y no cotizado, considera la Sala que COLPENSIONES se encuentra obligada a la realización de un CÁLCULO ACTUARIAL, y la posterior inclusión de las semanas que esté representa en la HISTORIA LABORAL del demandante JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ, luego del pago del empleador privado seguros GENERALES SURAMERICANA S.A.

Pues dicha obligación es legal, y tiene su fundamento en el párrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, donde se establecieron los requisitos para obtener la pensión de vejez, veamos:

“PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:

a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;

b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados;

c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.

e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.

En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso,

*trasladen, con base en el **cálculo actuarial**, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, **a satisfacción de la entidad administradora**, el cual estará representado por un bono o título pensional.” (Negrillas de la Sala)*

De los anterior se desprende, que la figura del CÁLCULO ACTUARIAL, impide que el trabajador tenga que soportar las consecuencias por la falta de afiliación atribuible a su empleador, o en los casos como el de autos, de falta de cobertura del ISS en la zona donde se desarrolló el contrato de trabajo, y, en consecuencia, garantiza que sus derechos mínimos e irrenunciables no se vean afectados por dicha omisión, pues a través de esa institución, el legislador permite que el periodo en que no se hicieron los aportes a un fondo pueda contabilizarse dentro de su historial de semanas de cotización. De ahí que constituye una solución equilibrada para los casos de omisión de la afiliación, dado que no solo permite materializar la finalidad del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, sino la sostenibilidad del mismo, sin perjuicio de las prerrogativas de los trabajadores¹.

En definitiva, si bien COLPENSIONES no es la llamada a responder en los eventos de no afiliación de un trabajador, sí está en la obligación legal de: **(i)** fijar el cálculo actuarial, **(ii)** recibir su cancelación por parte del incumplido o activar los medios de cobro con los que disponga, y **(iii)** superados los demás requisitos legales, **asumir el reconocimiento y pago oportuno de la respectiva prestación**, para lo cual se deberá considerar el tiempo de servicio prestado por el trabajador durante el lapso en el que se causó el pasivo del empleador, así se indicó en la sentencia **SU-226 de 2019**.

Lo cual resulta consecuente con la jurisprudencia de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, quien ha dejado en claro que la figura que debe utilizarse para dirimir esta problemática, es la del CÁLCULO PENSIONAL, misma que debe ser asumida en su TOTALIDAD por el empleador (sentencia SL-3547 del 22 de agosto de 2018, con radicación 68.421, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO), veamos:

“...De entrada, se advierte que de manera reiterada, la jurisprudencia de esta Sala ha estimado que es viable y necesario que los tiempos trabajados y no cotizados por la ausencia de cobertura del sistema

¹ Corte Suprema de Justicia - Sentencia **STL11357-2021**.

general de pensiones en algunos lugares de la geografía nacional, sean computados a través de cálculos actuariales representados en títulos pensionales a cargo del empleador, con el fin de que el trabajador complete la densidad de cotizaciones exigida por la ley; esto es, bajo el entendido que el derecho a la seguridad social es irrenunciable e inalienable...”

En efecto, y dado que la sentencia de primer grado se encuentra acorde al criterio jurisprudencial expuesto, habrá de confirmarse este punto de la sentencia objeto de la consulta, pero será modificada en los extremos del cálculo actuarial, pues como bien lo señaló su apoderada judicial, los últimos dos años de relación laboral, si se cumplió con la afiliación y pago de aportes a seguridad social en pensiones, y por el ello, el cálculo actuarial no puede comprender un periodo que ya se encuentra cotizado, según se advierte en la historia laboral del actor, visible en la carpeta N° 3 del expediente administrativo aportado por COLPENSIONES, veamos:

Tipo de Documento:	Cédula de Ciudadanía	Fecha de Nacimiento:	27/11/1933
Número de Documento:	503939	Fecha Afiliación:	01/01/1967
Nombre:	JAIRO IGNACIO ISAZA VELEZ	Correo Electrónico:	PELAEZABOGADOS2015@GMAIL.COM
Dirección:	CALLE 48D NO 65A 19	Ubicación:	
Estado Afiliación:	Inactivo		

RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EMPLEADOR

En el siguiente reporte encontrará el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o de sus propias cotizaciones como trabajador independiente, es decir, las que han sido cotizadas desde enero de 1967 a la fecha. Recuerde que la Historia Laboral representa su vida como trabajador, la que usted ha construido mes a mes y año a año.

[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
2016300002	SIN NOMBRE	01/01/1967	04/06/1969	\$4.410	126,57	0,00	0,00	126,57
2018201609	INGENIERIA DE SISTEM	01/06/1969	01/02/1971	\$5.790	87,29	0,00	0,57	86,71
2018202744	ADMINISTRADORA Y DIS	18/01/1971	01/03/1971	\$3.300	6,14	0,00	2,14	4,00
2042300080	PANTEX	01/09/1971	14/01/1973	\$5.790	71,71	0,00	0,00	71,71
[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS:								289,00

En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia, en cuanto a que el cálculo actuarial a cargo de Seguros Generales Suramericana S.A., solo se hará por el periodo comprendido entre el 16 de julio de 1959 y el 31 de diciembre de 1966.

Pensión de vejez, normatividad aplicable.

Debe recordarse que el juez de primer grado accedió a una pensión de jubilación por aportes a la que alude la Ley 71 de 1988, al encontrar satisfechos los requisitos legales previstos en el art. 7 de la referida normatividad, veamos:

“ARTÍCULO 7.- Reglamentado por el Decreto Nacional 2709 de 1994. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

Y es que, teniendo en cuenta que el señor JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ nació el día 10 de enero de 1933, es evidente que la edad pensional de 60 años prevista en la referida normativa (60 años – hombres) los cumplió el mismo mes y día del año 1993.

Fecha para la cual ya reunía mas de 20 años de servicios, incluyendo allí el tiempo público no cotizado a cargo del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA², las semanas cotizadas al ISS entre el 1° de enero de 1967 y el 14 de enero de 1973, y el tiempo privado representado en un cálculo actuarial, así

Entidad	Desde	Hasta	Semanas
ISS (tiempo cotizado)	1/01/1967	14/01/1973	289
Tiempo privado no cotizado (Seguros Suramericana S.A.)	16/07/1959	31/12/1966	388,71
Tiempo Público no cotizado (Departamento de Antioquia)	28/03/1979	15/06/1988	480,42

1158,13

Pues al convertir estas semanas en tiempo de servicios (1.158,13 / 51.42) es valor resultante es de **22,52 años**, quedando así en evidencia la satisfacción de los requisitos legales, para causar dicha prestación económica bajo esta normativa, que sin lugar a dudas permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, tal y como lo adoctrinó la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en la memorable sentencia SL 4457-2014, en la cual señaló, que el hecho de que la entidad no hubiera efectuado los aportes a una caja de previsión social no podía coartar la consolidación del derecho irrenunciable a la pensión de jubilación, de manera que, para los efectos de la Ley 71 de 1988, debe tenerse en cuenta el tiempo servido a entidades oficiales, sin importar si había sido o no materia de aportes o cotizaciones a entidades de previsión social.

² Certificado laboral visible a folios 161 del archivo PDF 001.

En consecuencia, se confirmará lo resuelto en este sentido, y no accederá la Sala a modificar la normatividad pensional aplicable, toda vez que el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, reclamado por la activa en su recurso de alzada, en ningún momento rigió las condiciones pensionales del demandante, el actor no realizó ninguna cotización en vigencia de dicha normativa, pues como bien lo indicó el juez de primer grado, el ciclo laboral del demandante se cerró en el mes de junio de 1988 con el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, es decir, mucho antes que empezara a regir tal normativa interna del ISS.

Sumado a lo anterior, debe tenerse muy presente que la sumatoria de tiempo público y privado bajo esta Acuerdo ISS, permitida por el órgano de cierre en la sentencia SL1947-2020 del 1° de julio de 2020, M.P. IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ, solo es posible en virtud del régimen de transición pensional, pues se utiliza de la Ley 100 de 1993, el literal f) del art. 13, normatividad según la cual: *“para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio”*, y en el presente asunto el demandante no es destinatario de la Ley 100 de 1993, ni beneficiario del régimen de transición pensional allí previsto, al haber causado su derecho pensional el 10 de enero de 1993.

Dicha prestación estará a cargo de COLPENSIONES, y no del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA como lo sugiere la apoderada judicial de COLPENSIONES, quien se olvida que el demandante se afilió al régimen de prima media con prestación definida en el año 1967 a través del empleador privado “SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.”, y si bien la obligación de afiliación y pago de aportes al ISS hoy COLPENSIONES tratándose de entidades territoriales solo comenzó a regir a partir del 30 de junio de 1995, según lo previsto en el art. 151 de la Ley 100 de 1993, esto no significa, que sea el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA quien deba sumir el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por ser la última entidad en la

que estuvo laborando el actor sin efectuar cotización, pues la solución para este tipo de inconvenientes, es la figura del bono pensional, consagrada en el art. 115 y ss de la Ley 100 de 1993, que fue precisamente lo ordenado en la primera instancia, toda vez que la finalidad del bono es contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones, y para ello deberá, gestionarse la expedición de un Bono Tipo “B”.

Prescripción y disfrute pensional

Al respecto estima la Sala que, si bien el actor causó el derecho a la pensión de jubilación por aportes el día 10 de enero de 1993, solo reclamó este derecho ante la administradora pública de pensiones muchos años después, ocasionando con tal omisión, la prescripción parcial de mesadas pensionales, cuyo término trienal de prescripción debía contabilizarse desde la fecha de presentación de la demanda (21 de febrero de 2018 – folios 22 del archivo PDF 001), como bien lo concluyó el juez de primer grado, pues en realidad esa reclamación administrativa a la que alude la apoderada judicial de la demandante en su alzada, realizada el día 10 de abril de 2017 (fls. 43 del archivo PDF 001), no estaba llamada a interrumpir el término de prescripción, pues esa interrupción del término prescriptivo por una sola vez, como lo refiere el art. 151 del CPTSS, ya se había dado con la reclamación pensional del año 2013, según lo advierte COLPENSIONES en la resolución N° SUB-104465 del 21 de junio de 2017, visible a folios 61 del archivo PDF 001, veamos:

Que mediante Resolución GNR 247250 de 03 de octubre de 2013, esta administradora, negó el reconocimiento de una pensión de vejez a él (la) señor(a) **ISAZA VELEZ JAIRO IGNACIO**, identificado(a) con CC No. 503,939, con un total de 761 semanas de cotización, conforme a la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003, Decreto 2709 de 1994, por falta de competencia.

En consecuencia, esta Sala no accederá a modificar lo relativo al término prescriptivo, confirmándose así la prescripción parcial de mesadas pensionales que operó con anterioridad al 21 de febrero de 2015.

Mesada 14.

Encuentra la Sala que le asiste razón a la recurrente, en cuanto a que la pensión de vejez que le asiste al demandante JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ, debe otorgarse en razón de 14 mesadas anuales, pues así sea cierto que el derecho se causó antes de la vigencia del art. 142 de la Ley 100 de 1993, esta normativa consagró tal derecho, a favor de los actuales y futuros pensionados, y la pensión de vejez del actor, debe entenderse inmersa dentro de ese primer grupo, pues independiente de los motivos por los cuales no se reclamó el derecho en aquella época (10 de enero de 1993), la pensión ya se entendía causada en ese momento al confluir allí los requisitos de edad y tiempo de servicios, lo que hizo al demandante merecedor de la mesada 14, siempre y cuando, el valor de la misma no exceda de 15 SMLMV, veamos:

“ARTÍCULO 142. MESADA ADICIONAL PARA PENSIONADOS. *Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.*

PARÁGRAFO. *Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión sin que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual.*”

Advirtiéndole la Sala, que así esta mesada haya desaparecido en virtud del acto legislativo 01 de 2005, esta reforma constitucional resulta inane frente a la situación específica del demandante, por tratarse de un derecho adquirido y/o consolidado, motivos por los cuales se revocará la absolución impartida en este sentido, para en su lugar acceder a su reconocimiento y pago a cargo de COLPENSIONES, limitándola únicamente al condicionamiento establecido en el parágrafo del art. 142 de la Ley 100 de 1993.

Encontrándose también ajustada la sentencia de primer grado, en cuanto autorizó a COLPENSIONES a efectuar la deducción del aporte obligatorio con destino al subsistema de salud, al ser esta una obligación legal de todo

pensionado, conforme lo reglado en el art. 143 de la Ley 100 de 1993, y también fue acertada la decisión de haber ordenado la compensación indexada de lo reconocido al señor JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ a título de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a través de la resolución N° GNR-448444 del 29 de diciembre de 2014 en la suma única de \$10.632.023, pues esta indemnización sustitutiva solo estaba llamada a operar de manera subsidiaria en ausencia del derecho principal que es la pensión de vejez como tal, advirtiendo la Sala que esta indemnización de manera alguna constituía un impedimento para el reconocimiento pensional, al ser la pensión de vejez un derecho social irrenunciable e imprescriptible, que podía ser reclamado en cualquier momento luego de su causación, y la aparente incompatibilidad se conjuraba fácilmente con la compensación indexada, como efectivamente ocurrió.

Sin embargo, atendiendo al recurso de apelación presentado por la activa, estima la Sala que la sentencia de primer grado, debe ADICIONARSE en el sentido de concederle a esta administradora pública de pensiones, un plazo de 60 días calendario para proceder con el pago efectivo de la pensión de vejez y su retroactivo al demandante JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ, una vez haya recibido a satisfacción los recursos sufragados por el empleador SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., tiempo que deberá destinar para gestionar el bono pensional ante el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Intereses moratorios e indexación de las condenas

Esta Sala no accederá a la condena por intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, pues como bien lo indicó el juez de primer grado, el reconocimiento pensional efectuado a favor del demandante, obedeció a la aplicación de criterios jurisprudenciales, que dieron lugar a ordenar a un empleador privado el pago de un cálculo actuarial por un tiempo laborado en una época donde no existía obligación de afiliación y pago de aportes al instituto de seguros sociales, en lo que atañe al riesgo pensional, tiempo sin el cual el demandante no podía acceder a la pensión de vejez que reclama, pues la administradora colombiana de pensiones no se encontraba legitimada en la causa por activa para ejercer acciones de cobro, frente al tiempo laborado y no cotizado con anterioridad al 1° de enero de 1967, máxime que la pensión de

vejez causada por el demandante, no hace parte del catálogo de prestaciones económicas propias de la Ley 100 de 1993, y dichos intereses solo están previstos, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley.

Por lo anterior, se mantendrá incólume la condena a la indexación del retroactivo adeudado, pues su aplicación resulta viable en el presente asunto dada la improsperidad de la pretensión principal de intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, por lo que se hacía necesario de un mecanismo de actualización de capitales para, además de mantener el poder adquisitivo constante de las mesadas pensionales, subsanar el retardo de la demandada en pagar la pensión de vejez, indexación que debe ser calculada por COLPENSIONES a partir del 21 de febrero de 2015, mes a mes y sobre cada una de las mesadas que componen el retroactivo pensional adeudado hasta el momento en que se produzca su pago efectivo, Para liquidar la indexación la pasiva tendrá en cuenta la siguiente formula:

ÍNDICE FINAL

ÍNDICE INICIAL x VALOR A INDEXAR – VALOR A INDEXAR

Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en reciente sentencia SL359-2021, donde conceptuó la procedencia de la indexación de las condenas sobre las cuales no se impusiera una sanción moratoria, veamos:

“...la indexación se erige como una garantía constitucional (art. 53 CP), que se materializa en el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones, en relación con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE. A su vez, el artículo 1626 del Código Civil preceptúa que «el pago efectivo es la prestación de lo que se debe», esto es, que la deuda debe cancelarse de manera total e íntegra a la luz de lo previsto en el artículo 1646 ibidem. De ahí que, si la AFP no paga oportunamente la prestación causada en favor del afiliado, pensionado o beneficiario, tiene la obligación de indexarla como único conducto para cumplir con los mencionados estándares de totalidad e integralidad del pago. Por tal motivo, es incompleto el pago realizado sin el referido ajuste cuando el transcurso del tiempo devaluó el valor del crédito.

Ahora, la indexación no implica el incremento del valor de los créditos pensionales, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como parte de la mesada, puesto que no satisface necesidades sociales del pensionado, y menos como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, garantiza que los créditos pensionales no pierdan su valor real...”

No existiendo más aspectos de la sentencia de primera instancia que deban ser conocidos en apelación y consulta, la misma será modificada en cuanto a los extremos temporales del cálculo actuarial que estará a cargo de la codemandada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., y el número de mesadas pensionales que le corresponden al demandante.

Finalmente, en relación a la solicitud de extender la condena en costas procesales a cargo del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, estima la Sala que la misma no resulta procedente en el sub lite, pues en realidad dicha parte no salió vencida en el juicio, el papel que esta entidad desempeña es netamente pasivo, no le corresponde el reconocimiento pensional a favor del demandante, solo está llamada a responder por el bono pensional derivado del tiempo publico laborado en dicha entidad por el demandante, una vez se agote el trámite administrativo interinstitucional correspondiente, la Sala solo consideraría viable imponerle condena en costas procesales, en el EVENTUAL caso de haberse acreditado que hizo caso omiso al requerimiento administrativo realizado por COLPENSIONES, para que concurriera con el pago del bono pensional.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la prosperidad parcial de los recursos de apelación formulados por las apoderadas judiciales de la parte demandante y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., las costas procesales de la segunda instancia estarán a cargo de COLPENSIONES y a favor del demandante JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ, según lo dispuesto en el numeral 1° del art. 365 del Código General del Proceso, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de 1.160.000 equivalentes a 1 SMLMV para la anualidad 2023.

VIII - DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha 30 de marzo de 2023 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto a los extremos temporales por los cuales deberá liquidarse y pagarse el cálculo actuarial a cargo de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., estos serán por periodo comprendido entre el 16 de julio de 1959 y el 31 de diciembre de 1966, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha 30 de marzo de 2023 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto a al número de mesadas pensionales que le corresponden al demandante JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ, señalando que este pensionado tiene derecho a la mesada 14 prevista en el art. 142 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando el valor resultante se su mesada pensional no exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual, según lo expuesto en precedencia.

TERCERO: ADICIONAR la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha 30 de marzo de 2023 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín en el sentido de concederle a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, un plazo de 60 días calendario para proceder con el pago efectivo de la pensión de vejez y su retroactivo al demandante JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ, una vez haya recibido a satisfacción los recursos sufragados por el empleador SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., tiempo que deberá destinar para gestionar el bono pensional ante el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha 30 de marzo de 2023 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, según lo expuesto en precedencia.

QUINTO: Costas en esta instancia, a cargo de COLPENSIONES, y a favor del demandante JAIRO IGNACIO ISAZA VÉLEZ, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 equivalentes a 1 SMLMV para la anualidad 2023.

SEXTO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

SÉPTIMO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA